



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

DICTAMEN DE EVALUACION

Los miembros del Tribunal Examinador del Examen para el ingreso al Agrupamiento “Técnico Jurídico”, para actuar en las dependencias de este MPD con sede en las ciudades de: Río Gallegos (TJ N° 265), Ushuaia (TJ N° 267) y Río Grande (TJ N° 268), Sr. Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Pampa, Dr. Martín Miguel García Ongaro. Vocales: Señor/a Secretario/a Letrado/a de la Defensoría General de la Nación, Dr./a. Federico Miguel Malato y María Josefina Rotaeché, pasan a concretar su dictamen respecto de los fundamentos y calificaciones a ser asignados.-----

A tal efecto, se procederá a valorar aludiendo al código que fuera impuesto por Secretaría, para reserva de la identidad de los participantes de acuerdo a lo ordenado en el Art. 17 del reglamento aprobado mediante resolución D.G.N. N° 1292/21; se procede, en todos los casos, atendiendo a las pautas de evaluación establecidas e indicando en cada caso las apreciaciones particulares que haya presentado, de lo que resulta:

EXÁMENES 07 DE FEBRERO

POSTULANTE 1:

Caso Penal: Correcto aunque escueto planteo de la nulidad de la detención y secuestro así como del correspondiente sobreseimiento. Plantea la excusa del art. 5 de la ley 23.364 adecuadamente. Omite analizar subsidiariamente la posible aplicación de calificaciones menos gravosas. Planteo correcto y adecuadamente fundado de la impugnación de la prisión preventiva, así como de la excarcelación y prisión domiciliaria.

Se le asignan 25 (veinticinco) puntos.

Caso Defensoría de Víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, el marco de normas aplicables y las figuras penales comprometidas. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Correcta identificación de medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención y fundamenta en la Resolución DGN 230/17 que regula la actuación de la DPO (no menciona Ley de MPD ni las Reglas de Brasilia). Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo para impedir la medida. Ofrece como prueba el expediente judicial de violencia pero no realiza una fundamentación jurídica que avale su pedido. Indica correctamente que daría intervención al Defensor de Menores (no menciona las normas correspondientes). Señala que iniciaría una acción de amparo y menciona sus

USO OFICIAL

requisitos pero no analiza cada uno de ellos en relación con el caso planteado. Menos aún justifica la arbitrariedad del acto atacado. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar innovativa y analiza los requisitos de procedencia según el caso concreto. Ofrece prueba. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien menciona alguno de los derechos involucrados no se citan mínimamente las normas que protegen el derecho a la vivienda, el interés superior del niño y el principio de progresividad. No se analizan las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. Menciona el BLSG y hace reserva del caso federal. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 13 (trece) puntos.

Se le asigna un total de 57 (cincuenta y siete) puntos.

POSTULANTE 6:

Caso Penal: Correcto planteo de la aplicación del art. 5 de la ley 26.364 con invocación de la situación de vulnerabilidad de su asistida. Cita reglas de Brasilia. Omite todo análisis de la validez del procedimiento y de la cuestión de fondo. Correcto planteo de la excarcelación, sin reparar en la alternativa subsidiaria del arresto domiciliario.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso Defensoría de Víctima: No explicita el conjunto de derechos que conciernen a la persona en su condición de víctima, sin embargo realiza una propuesta de abordaje en la estrategia de asistencia técnica que resulta válida. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, el marco de normas aplicables y las figuras penales comprometidas. Caracteriza correctamente la situación en el marco de vulneraciones derivadas de violencia institucional, consigna derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, así como la preservación de la prueba en contextos de abusos estatales. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se especifican medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero la fundamentación es muy genérica (menciona analiza la Ley de MPD pero no analiza la Resol DGN 230/17 ni las Reglas de Brasilia). Su estrategia defensiva no resulta efectiva ya que consiste únicamente en interponer una acción de amparo contra Gendarmería Nacional sin tener en cuenta que esta acción no puede suspender el lanzamiento ordenado por un juez en otro proceso. Por otra parte, no se analizan los requisitos de procedencia del amparo sino los de las medidas cautelares. Hay un tratamiento confuso de estos dos institutos procesales. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien cita el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño no menciona las normas que protegen el derecho a la vivienda, ni analiza las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

género. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores. Ofrece prueba. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.

Se le asigna un total de 41 (cuarenta y un) puntos.

POSTULANTE 10:

Caso Penal: Analiza correcta y detalladamente todos los aspectos procesales y de fondo del caso. Plantea nulidad del procedimiento, aplicación del art. 5 de la ley 26.364 y la falta de consumación del delito imputado a su asistida, con cita de convenciones y jurisprudencia adecuadas. Critica la imposición de la prisión preventiva de manera fundada en normativa y jurisprudencia aplicables y solicita subsidiariamente la prisión domiciliaria.

Se le asignan 30 (treinta) puntos.

Caso Defensoría de Víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, el marco de normas aplicables, la jurisprudencia aplicable y las figuras penales comprometidas. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se formulan propuestas de medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso no penal: Resulta erróneo sostener que va a realizar una “defensa penal de la pupila procesal”. Sin embargo analiza correctamente la situación de vulnerabilidad a partir de las Reglas de Brasilia y la Resolución DGN 230/17. Señala que iniciaría una acción de amparo y analiza sus requisitos. La arbitrariedad o ilegalidad del acto no se encuentra fundada. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar innovativa y analiza los requisitos de procedencia según el caso concreto. Menciona medios de prueba. El fundamento jurídico del caso es muy genérico. Si bien cita el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño no menciona las normas que protegen el derecho a la vivienda, ni analiza las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. Menciona el BLSG, la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16.986 y hace reserva del caso federal. Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo para impedir la medida pero la justificación es bastante genérica. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores en dicho proceso. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 13 (trece) puntos.

Se le asigna un total de 63 (sesenta y tres) puntos.

POSTULANTE 14:

Caso Penal: Invoca la situación de vulnerabilidad de la víctima pero no postula la aplicación del art. 5 de la ley 26.364 o alguna causa de justificación. Omite todo análisis de la validez del procedimiento. Menciona la posible defensa ineficaz de la anterior asistencia pero no justifica su planteo. Plantea una “eximición” de prisión que no sería procedente porque la imputada se encuentra detenida. Critica la imposición de la prisión preventiva con base en la situación de vulnerabilidad y solicita subsidiariamente arresto domiciliario.

Se le asignan 9 (nueve) puntos.

Caso Defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se encuentran referidas algunas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención y analiza la Resolución 230 que regula la actuación de la DPO (no menciona Ley de MPD, Reglas de Brasilia). Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo para impedir la medida pero la fundamentación jurídica que realiza es muy genérica. Menciona que pediría una medida de no innovar pero no analiza los requisitos de procedencia según las circunstancias del caso. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien menciona alguno de los derechos involucrados no se citan mínimamente las normas que protegen el derecho a la vivienda y el interés superior del niño. No se mencionan ni analizan las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. Indica correctamente que daría intervención al Defensor de Menores pero no menciona las normas correspondientes. Ofrece prueba. Sostiene que iniciaría una acción de amparo para que se le otorgue una vivienda pero no analiza adecuadamente los requisitos de procedencia de esta acción. Indica que realizaría gestiones administrativas. cita jurisprudencia.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 40 (cuarenta) puntos.

POSTULANTE 15:

Caso Penal: Omite todo análisis de las cuestiones procesales y de fondo del caso. Únicamente indica que plantearía la excarcelación sin cita de las normas legales en que la fundaría.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Caso Defensoría de víctima: Realiza una caracterización del caso y de las figuras penales que podrían resultar de aplicación. Se encuentra plasmada en forma genérica la propuesta de instar acciones penales ante el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo no se formulan referencias sobre los derechos de las víctimas, así como tampoco una estrategia de asistencia técnica. También se omiten referencias sobre las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas, así como tampoco propone diligencias propias de la representación procesal de la víctima, normas aplicables, ni referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se consignan derivaciones a otros organismos, ni la articulación de medidas de protección de la víctima, dado que solo se menciona de manera genérica. No se formulan propuestas de aseguramiento de evidencia, ni de diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales, así como tampoco se encuentran referidas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero no analiza las normas que regulan la actuación de la Defensa Pública Oficial (la Resolución DGN 230/17, la Ley del MPD, y las Reglas de Brasilia). Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo para hacer cesar la medida de lanzamiento y fundamenta. El tratamiento del caso es bastante genérico. Menciona los derechos involucrados y cita la Convención sobre los derechos del Niño y la Convención Belem Do Pará pero no individualiza las normas que serían aplicables en el caso. No se mencionan mínimamente las normas que protegen el derecho a la vivienda. Invoca adecuadamente la perspectiva de género. No ofrece prueba. No realiza otros planteos. Menciona gestiones extrajudiciales. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 9 (nueve) puntos.

Se le asigna un total de 24 (veinticuatro) puntos.

POSTULANTE 16:

Caso Penal: Analiza correctamente la situación de vulnerabilidad de la imputada, critica la falta de perspectiva del género del auto de procesamiento y postula la aplicación del art. 34 inc. 3° del CP y 5 de la ley 26.364. Asimismo, analiza correcta, aunque escuetamente, la validez del procedimiento de detención y secuestro. Critica la imposición de la prisión preventiva y postula alternativas.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la

articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se encuentran referidas algunas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención y analiza parcialmente la Resolución DGN 230/17 que regula la actuación de la DPO (no menciona Ley de MPD, Reglas de Brasilia). Su estrategia defensora no resulta efectiva ya que consiste únicamente en interponer una acción de amparo contra Gendarmería Nacional para evitar la expulsión sin tener en cuenta que esta acción no puede suspender el lanzamiento ordenado por un juez en otro proceso. Respecto de esta acción sostiene que iniciaría gestiones extrajudiciales (oficio, pedido de audiencia). Analiza los requisitos de la acción de amparo en relación a los hechos del caso. Indica que solicitaría también una medida cautelar pero el objeto de esta medida urgente tampoco permite dejar sin efecto lo dispuesto por otro juez. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien menciona alguno de los derechos involucrados no se citan mínimamente las normas que protegen el derecho a la vivienda y el interés superior del niño. No se mencionan ni analizan las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. Ofrece prueba. Menciona el BLSG, la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo y hace reserva del caso federal. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Se le asigna un total de 49 (cuarenta y nueve) puntos.

POSTULANTE 20:

Caso Penal: Invoca la situación de vulnerabilidad de su asistida pero no plantea la aplicación del art. 5° de la ley 26.364 ni otras causas de justificación. No analiza la validez del procedimiento inicial. Critica la imposición de la prisión preventiva y dice que solicitará la libertad pero no indica la normativa aplicable ni postula medidas subsidiarias.

Se le asignan 8 (ocho) puntos.

Caso defensoría de víctima: Señala una estrategia adecuada de asistencia técnica, sin embargo no identifica las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso, así como tampoco se consignan derivaciones a otros organismos. Es adecuada la propuesta de articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. No se encuentran referidas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero no analiza las normas que regulan la actuación de la Defensa Pública Oficial (la Resolución DGN 230/17, la Ley del MPD, y las Reglas de Brasilia). Advierte correctamente que debe presentarse en el expediente de desalojo para hacer cesar la medida de lanzamiento. La fundamentación de su planteo es muy genérica. Menciona las leyes que protegen los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia pero no individualiza las normas aplicables. No invoca la Convención Belem Do Pará. No se mencionan mínimamente las normas que protegen el derecho a la vivienda, ni el interés superior del niño. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores. No ofrece prueba. No realiza otros planteos. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 8 (ocho) puntos.

Se le asigna un total de 31 (treinta y un) puntos.

POSTULANTE 22:

Caso penal: Analiza la situación de vulnerabilidad de la imputada y postula incorrectamente el sobreseimiento por aplicación del art. 34 inc.1 y 2 del CP, pero omite solicitar la aplicación del art. 5º de la ley 26.364 o de las otras causas de justificación más adecuadas al caso. Plantea la nulidad del procedimiento con base en la falta de autorización judicial y asistencia técnica pero no en la autoincriminación de la imputada. Solicita fundadamente la excarcelación de la imputada.

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Sin embargo, no señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se encuentran referidas algunas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: No menciona el carácter de su intervención ni analiza las normas que regulan la actuación de la Defensa Pública Oficial (la Resolución DGN 230/17, la Ley del MPD, y las Reglas de Brasilia). Su estrategia defensorista no resulta efectiva ya que consiste únicamente realizar gestiones extrajudiciales e interponer una acción de amparo contra Gendarmería Nacional sin tener en cuenta que esta acción no puede suspender el lanzamiento ordenado por un juez en otro proceso. Por otra parte, no se analizan los requisitos de procedencia del amparo. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien cita normas constitucionales y convencionales (entre ellas la

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y Convención sobre los Derechos del Niño) no analiza el derecho a la vivienda, no explica la procedencia las disposiciones mencionadas de acuerdo con las circunstancias del caso, ni tampoco analiza las obligaciones estatales respecto de su defendida y sus hijos. No advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores. No realiza otros planteos. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 8 (ocho) puntos.

Se le asigna un total de 41 (cuarenta y un) puntos.

POSTULANTE 25:

Caso Penal: Analiza la condición de vulnerabilidad de la víctima y solicita el sobreseimiento por estado de necesidad y subsidiariamente por aplicación del art. 5 de la ley 26.363. Advierte que el delito no se habría consumado y propone cambio de calificación. Omite analizar la validez del procedimiento. Solicita fundadamente la excarcelación y el arresto domiciliario en subsidio.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables, así como también la formulación de referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se encuentran referidas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso no penal: Menciona correctamente el carácter de su intervención y analiza adecuadamente las normas que regulan la actuación de la DPO (Resolución 230 y Reglas de Brasilia). Indica que realizaría gestiones administrativas. Señala que iniciaría una acción de amparo contra Gendarmería Nacional y analiza adecuadamente los requisitos de procedencia de esta acción de acuerdo con los hechos del caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar y analiza los recaudos de viabilidad según el caso concreto. Fundamenta correctamente en la afectación del derecho a la vivienda citando las normas que protegen este derecho. Menciona la perspectiva de género y la situación de violencia familiar pero no indica cuáles son las normas que establecen las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género y las que protegen el interés superior del niño. Menciona medios de prueba. Menciona el BLSG, la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16.986 y hace reserva del caso federal. Advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores en dicho proceso. Cita jurisprudencia adecuada a los hechos del caso. Sin embargo, no advierte la necesidad de presentarse en el proceso de desalojo por lo que su estrategia



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

defensista no es efectiva ya que la acción de amparo no puede suspender el lanzamiento ordenado por un juez en otro proceso.

Se le asignan 16 (dieciséis) puntos.

Se le asigna un total de 56 (cincuenta y seis) puntos.

POSTULANTE 27

Caso Penal: Plantea, sin fundarla en normas legales ni supralegales, la nulidad del procedimiento. Del mismo modo, la hipotética aplicación de beneficios por colaborar con la investigación. Omite invocar el art. 5 de la ley 26.364 y el análisis del fondo. Planteo correcto de la excarcelación.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Caso Defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. No se encuentran referidas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Menciona que intervendría como Defensor de Menores y fundamenta en la LMP. Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo pero no indica que planteos realizaría ni fundamenta jurídicamente. Propone la realización de gestiones extrajudiciales. Indica que interpondría una acción de amparo y solicitaría una medida cautelar pero no es claro el objeto de su pretensión. Tampoco analiza los requisitos de procedencia. Menciona las leyes 26061 y 26485. Invoca el Interés superior del niño. No realiza un análisis del derecho a la vivienda tampoco menciona las normas que establecen las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género. No ofrece prueba, no realiza otros planteos en el amparo. No cita jurisprudencia. No queda claro si realizaría alguna defensa judicial en representación de la señora Gomez.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 41 (cuarenta y un) puntos.

POSTULANTE 29:

Caso Penal: Correcto y completo análisis de la invalidez del procedimiento, de la condición de vulnerabilidad de la víctima y la posibilidad de solicitar la aplicación del art. 5 de la ley 26.364.

Omite proponer calificación menos gravosa por la falta de consumación del delito. Requiere la excarcelación y en subsidio la prisión domiciliaria de manera fundada.

Se le asignan 28 (veintiocho) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza un adecuado resumen del catálogo de derechos y la estrategia de asistencia técnica. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan derivaciones a otros organismos, y la articulación de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, al tiempo que se mencionan diligencias relacionadas a la preservación de la prueba en contextos de abusos institucionales. Se encuentran referidas de modo general algunas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Menciona correctamente el carácter de su intervención y analiza adecuadamente las normas que regulan la actuación de la DPO (Resolución 230 y Reglas de Brasilia). Menciona la realización de gestiones extrajudiciales. Sostiene correctamente que se presentaría en el expediente de desalojo para impedir la medida y fundamenta. Señala que iniciaría una acción de amparo y menciona sus requisitos genéricamente. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar de no innovar y analiza los requisitos de procedencia según el caso concreto. Analiza adecuadamente las normas que establecen las obligaciones estatales respecto de las mujeres víctimas de violencia de género y las que protegen el interés superior del niño. Refuta en forma fundada los planteos de Gendarmería. No fundamenta específicamente el derecho a la vivienda. Advierte la necesidad de dar intervención al Defensor de Menores en dicho proceso pero no cita las normas correspondientes. Ofrece prueba. Menciona el BLSG y hace reserva del caso federal. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Se le asigna un total de 65 (sesenta y cinco) puntos.

EXÁMENES DIA 08 DE FEBRERO

POSTULANTE 2:

Caso Penal: Equivoca la vía procesal al instar un sobreseimiento en lugar de apelar el procesamiento dictado. Plantea nulidad del procedimiento realizado pero no advierte que se no se trata de un allanamiento y, además, invoca normas del CPPF que no se hallan vigentes. Analiza escuetamente los elementos objetivos y subjetivos del delito de trata de personas, sin profundizar en la finalidad de explotación laboral. Omite cuestionar el dictado de la prisión preventiva y solicitar exención de prisión.

Se le asignan 10 (diez) puntos.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Caso defensoría de víctima: Realiza una propuesta procesal adecuada, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de asistencia técnica. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como el marco de normas aplicables. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se consignan derivaciones a otros organismos. Es correcta la propuesta de medidas de protección de la víctima y de aseguramiento de evidencia, así como también resultan adecuadas las medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Caso no penal: No menciona el carácter de su intervención ni analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resol 230, Reglas de Brasilia). Invoca el derecho a la salud y lo fundamenta genéricamente en la Constitución Nacional, CADH y PIDESC. No menciona la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No hay un análisis jurídico que dé sustento adecuado a la obligación de dar cobertura a la medicación (no analiza la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo). Los argumentos de Pami son respondidos en forma muy genérica. No analiza la incidencia del PMO. La relevancia de lo indicado por la médica tratante está insinuado. Si bien indica que iniciaría una acción de amparo no analiza los requisitos de esta acción y su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar pero tampoco analiza sus requisitos de procedencia. Ofrece prueba (le faltaría acreditar el alto costo de la medicación y la condición de enfermedad poco frecuente) y plantea caso federal. No menciona el BLSG ni la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 7 (siete) puntos.

Se le asigna un total de 34 (treinta y cuatro) puntos.

POSTULANTE 3:

Caso Penal: Apela de manera adecuada el procesamiento. Analiza correctamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Solicita el sobreseimiento. Cuestiona con argumentos sólidos el dictado de la prisión preventiva pero omite solicitar la exención de prisión por vía incidental.

Se le asignan 25 (veinticinco) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como el marco de normas aplicables, las figuras penales comprometidas, y la consigna de medidas de aseguramiento probatorio, así como referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se consignan derivaciones a otros organismos, ni medidas de

protección de la víctima, así como tampoco medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero no analiza las normas que la regulan (Ley de MPD, Resolución 230, Reglas de Brasilia). Funda el derecho a la salud en la CN y en doctrina. No menciona las normas de los tratados internacionales especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No hay un análisis jurídico que dé sustento adecuado a la obligación de dar cobertura a la medicación (no analiza la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo). Respecto de los argumentos de Pami analiza la importancia de lo indicado por la médica tratante y el alto costo de la medicación. No refuta lo atinente al PMO/vademecum pami. Indica que iniciaría una acción de amparo y analiza adecuadamente los requisitos para su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar pero los requisitos de procedencia son mencionados parcialmente. Ofrece prueba aunque omite presentar el recibo de jubilación para justificar la imposibilidad de pagar la medicación y la constancia del costo. Pareciera que un oficio a la médica tratante es dilatorio toda vez que el informe que necesita lo puede pedir directamente su defendido. Omite presentar BLSG, plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hacer reserva del caso federal. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 55 (cincuenta y cinco) puntos.

POSTULANTE 4:

Caso Penal: Plantea nulidad del procesamiento por falta de impulso fiscal y por la omisión de recibir declaración indagatoria a su asistido sin advertir que estos extremos fácticos no surgen de la consigna y sin indicar, además, las normas legales que habrían sido inobservadas y aquellas que sancionan con la invalidez dichos defectos formales. Analiza correctamente la prueba y los elementos objetivos y subjetivos del delito de trata. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva pero omite solicitar exención de prisión.

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso Defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como algunas medidas de protección de la víctima, y la consigna de algunas medidas de aseguramiento probatorio. No se formulan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se consignan derivaciones a otros organismos, así como tampoco medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención y advierte la vulnerabilidad de la consultante pero no analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resolución 230, Reglas de Brasilia). indica la necesidad de interponer una acción de amparo y analiza sus requisitos en forma parcial. Se equivoca en cuanto sostiene que la droga es experimental. El caso expresamente indica que la droga ha sido aprobada por ANMAT para la enfermedad que aqueja a la consultante. Fundamenta en el derecho a la salud de manera sumamente genérica. No menciona las normas de la CN y de los tratados internacionales especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No hay un análisis jurídico que dé sustento adecuado a la obligación de dar cobertura a la medicación (no analiza la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo). Indica la necesidad de solicitar una medida cautelar pero no analiza sus requisitos. Respecto de los argumentos de Pami analiza la importancia de lo indicado por la médica tratante y el alto costo de la medicación. No refuta lo atinente al PMO/vademecum pami. Omite ofrecer prueba, presentar BLSG, plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hacer reserva del caso federal. Sólo menciona la posibilidad de realizar un llamado previo al Pami para intentar que le entreguen la medicación. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Se le asigna un total de 43 (cuarenta y tres) puntos.

POSTULANTE 5:

Caso Penal: Indica que corresponde solicitar la excarcelación de su asistido sin advertir que se encuentra en libertad, no obstante lo cual analiza correctamente la inexistencia de riesgos procesales y la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. Plantea nulidad del procedimiento en virtud de la denuncia anónima y también del allanamiento, sin profundizar en cuál habría sido el exceso de las agencias administrativas. Analiza correctamente las cuestiones de hecho y prueba, la tipicidad objetiva y subjetiva de la figura y la falta de atribución de algún aporte concreto de su asistido que funde la autoría.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. Se señalan correctamente referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se consignan correctamente derivaciones a otros organismos, y asimismo distintas medidas y diligencias para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso no penal: Analiza adecuadamente el carácter de su intervención y fundamenta correctamente en las normas que regulan la actuación de la DPO. Funda genéricamente el derecho a la salud en la CN. No menciona las normas de los tratados internacionales especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No analiza la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo. Rebate los argumentos del Pami. indica correctamente que haría una intimación extrajudicial previa y luego iniciaría una acción de amparo. Analiza adecuadamente los requisitos para su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida innovativa y autosatisfactiva y analiza los requisitos de viabilidad. Ofrece prueba correctamente, le faltaría mencionar el recibo de la jubilación y la constancia del precio del medicamento para demostrar la imposibilidad de pagarlo. Omite presentar BLSG, plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hacer reserva del caso federal. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 16 (dieciséis) puntos.

Se le asigna un total de 56 (cincuenta y seis) puntos.

POSTULANTE 7:

Caso Penal: Indica que corresponde solicitar la excarcelación de su asistido sin advertir que se encuentra en libertad, no obstante lo cual analiza correctamente la inexistencia de riesgos procesales y la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. Plantea nulidad del procedimiento en virtud de la denuncia anónima y también del allanamiento, sin profundizar en cuál habría sido el exceso de las agencias administrativas. Analiza correctamente las cuestiones de hecho y prueba, la tipicidad objetiva y subjetiva de la figura y la falta de atribución de algún aporte concreto de su asistido que funde la autoría.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como algunas medidas de protección de la víctima por su condición migrante. No se formulan propuestas de aseguramiento probatorio, ni referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se consignan derivaciones a otros organismos, ni medidas para asegurar la reparación económica.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero no analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resol 230, Reglas de Brasilia). Fundamenta e invoca las normas pertinentes de los tratados internacionales referidas al derecho a la salud. Omite invocar



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Fundamenta también en la ley 23.661 y rebate adecuadamente el argumento del Pami respecto en la falta de inclusión en su vademecum. Omite invocar la ley de obras sociales, la que regula las EPF y la ley del Pami. Indica que iniciaría una acción de amparo y analiza adecuadamente los requisitos para su procedencia en el caso. Menciona que pediría una medida cautelar pero no analiza los requisitos para su viabilidad. Señala que adjuntaría prueba pero no la individualiza correctamente. Omite presentar BLSG, plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hacer reserva del caso federal. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 13 (trece) puntos.

Se le asigna un total de 50 (cincuenta) puntos.

POSTULANTE 8:

Caso Penal: Apela el procesamiento analizando de modo incompleto los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal, especialmente la finalidad de explotación. Critica el dictado de la prisión preventiva pero no solicita la exención de prisión.

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. No se señalan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Analiza adecuadamente el carácter de su intervención y fundamenta correctamente en las normas que regulan la actuación de la DPO. Le faltó referirse a las Reglas de Brasilia. El tratamiento del caso es sumamente genérico. Si bien menciona el derecho a la salud y a la vida, no fundamenta en normas constitucionales ni convencionales especialmente omite citar la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No menciona tampoco la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo. No plantea argumentos para rebatir las defensas del Pami. Como estrategia indica correctamente que haría una intimación extrajudicial previa y luego iniciaría una acción de amparo pero analiza de manera incompleta los requisitos para su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar pero el análisis de los requisitos de viabilidad es muy genérico. Ofrece prueba documental (le faltaría adjuntar el recibo de la jubilación y la constancia del precio del medicamento para demostrar la imposibilidad de pagarlo). Indica que iniciaría BLSG

y plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986. Omite hacer reserva del caso federal. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 46 (cuarenta y seis) puntos.

POSTULANTE 9:

Caso Penal: Plantea nulidad del procedimiento inicial por basarse en denuncia anónima y funda correctamente que el procedimiento de fiscalización originalmente justificado devino en un allanamiento domiciliario sin orden judicial u otra causa que lo habilitara. Apela el procesamiento analizando de modo completo y con cita de jurisprudencia nacional e interamericana la tipicidad objetiva y subjetiva. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva y solicita la imposición de medidas menos gravosas. Omite solicitar exención de prisión.

Se le asignan 27 (veintisiete) puntos.

Caso Defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. No se señalan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Analiza correctamente el carácter de su intervención pero no menciona las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resol 230, Reglas de Brasilia). Funda el derecho a la salud, vida digna e integridad psicofísica en la CN, en las normas de los tratados internacionales y especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, sustenta la obligación de dar cobertura a la medicación en la ley de enfermedades poco frecuentes. Rebate adecuadamente los argumentos del Pami especialmente el rol del médico tratante y el PMO. indica que iniciaría una acción de amparo y analiza adecuadamente los requisitos para su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida innovativa y analiza los requisitos de viabilidad. Adjunta prueba en forma correcta y completa. Solicita BLSG y plantea cuestión federal (omite plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo). Cita jurisprudencia.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Se le asigna un total de 65 (sesenta y cinco) puntos.

POSTULANTE 11



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Caso Penal: Plantea nulidad del procedimiento inicial por haberse fundado en una denuncia anónima y también la del procesamiento por carecerse de impulso fiscal y por haberse omitido recibir declaración indagatoria al imputado, los dos últimos extremos no contenidos en la enunciación del caso. Apela el procesamiento analizado correctamente las cuestiones de hecho y prueba así como la tipicidad objetiva y subjetiva, con cita de jurisprudencia. Critica la imposición de la prisión preventiva y solicita exención de prisión.

Se le asignan 22 (veintidós) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. No se señalan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Caso no penal: Analiza adecuadamente el carácter de su intervención y fundamenta correctamente en las normas que regulan la actuación de la DPO. Le faltó referirse a las Reglas de Brasilia. Funda el derecho a la salud en las normas de los tratados internacionales y especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, sustenta la obligación de dar cobertura a la medicación en la ley de enfermedades poco frecuentes. La invocación de las normas de la ley 24901 no se ha fundado adecuadamente ya que si bien plantea que iniciaría los trámites para que la señora obtenga el CUD, ello constituye una eventualidad que no puede darse por cierta en el caso. Indica estrategias extrajudiciales previas. Asesora para obtener CUD. Luego iniciaría una acción de amparo fundamentando correctamente los requisitos para su procedencia en el caso. Plantea la importancia de lo indicado por el médico tratante. No rebate adecuadamente el argumento del Pami en el supuesto de hecho planteado por el caso (persona que no tiene CUD). Sostiene que pediría el dictado de una medida innovativa y refiere los requisitos de viabilidad en forma genérica. Ofrece prueba (le faltaría adjuntar el recibo de la jubilación y la constancia del precio del medicamento para demostrar la imposibilidad de pagarlo). Indica que iniciaría BLSG, plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hace reserva del caso federal.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Se le asigna un total de 59 (cincuenta y nueve) puntos.

POSTULANTE 12

USO OFICIAL

Caso Penal: Analiza adecuadamente las cuestiones de hecho y prueba así como la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de trata. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva y solicita su morigeración. Indica que solicitará además la excarcelación sin advertir que en el caso hubiera correspondido la exención de prisión ya que su asistido se encuentra en libertad.

Se le asignan 22 (veintidós) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. Se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso no penal: Analiza adecuadamente el carácter de su intervención y fundamenta correctamente en las normas que regulan la actuación de la DPO. Funda el derecho a la salud en las normas constitucionales y convencionales y especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Menciona las leyes que regulan las obras sociales. Omite mencionar la ley de EPF. Plantea la relevancia de lo indicado por el médico tratante. No rebate específicamente el argumento del Pami respecto de la falta de inclusión en su vademecum. Indica estrategias extrajudiciales previas. Asesora para obtener CUD. Luego iniciaría una acción de amparo fundamentando correctamente los requisitos para su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida innovativa y analiza los requisitos para su procedencia. Ofrece prueba (le faltaría adjuntar el recibo de la jubilación y la constancia del precio del medicamento para demostrar la imposibilidad de pagarlo.). Indica que iniciaría BLSG, plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 16986 y hace reserva del caso federal.

Se le asignan 19 (diecinueve) puntos.

Se le asigna un total de 61 (sesenta y un) puntos.

POSTULANTE 13

Caso Penal: Plantea nulidad del procedimiento por originarse en una denuncia anónima y del allanamiento por haberse practicado sin orden judicial pero en este caso no funda la ilegitimidad del accionar de las agencias de prevención. Analiza correctamente las cuestiones de hecho y prueba sin profundizar en los requisitos objetivos y subjetivos de la tipicidad. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva y solicita su morigeración. No solicita la exención de prisión.

Se le asignan 12 (doce) puntos.



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como algunas medidas de protección de la víctima. No se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos y diligencias de asistencia migratoria. No hay referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención pero no refiere las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resol 230, Reglas de Brasilia). Funda el derecho a la salud en las normas constitucionales y convencionales. No menciona específicamente la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Omite analizar las leyes que dan sustento a la obligación de Pami para dar la cobertura de la medicación (leyes que regulan las obras sociales, ley de Pami, ley de EPF). Rebate los argumentos de Pami. Indica estrategias extrajudiciales previas. Luego iniciaría una acción de amparo fundamentando genéricamente los requisitos para su procedencia en el caso. Omite el pedido de una medida cautelar. No ofrece prueba en el amparo. Omite solicitar BLSG plantear inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo y hacer reserva del caso federal. No cita jurisprudencia.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Se le asigna un total de 40 (cuarenta) puntos.

POSTULANTE 17

Caso Penal: Indica que apelará el procesamiento y cita arts. 166 y sgtes. del CPPN pero no realiza ningún planteo concreto. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva y la omisión de aplicar medidas menos gravosas. No solicita exención de prisión.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.

Defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. La propuesta procesal no contempla peticiones relativas a medidas de protección de la víctima, así como tampoco de aseguramiento probatorio. Se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se señalan derivaciones a otros organismos, ni referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Caso no penal: Indica el carácter de su intervención y fundamenta correctamente en las normas que regulan la actuación de la DPO. El tratamiento del caso es sumamente genérico y la redacción es

bastante confusa. Es incorrecto señalar que existe un deber de agotar la vía administrativa en forma previa a iniciar un amparo de salud. Tampoco corresponde intimar a Pami para que entregue el certificado de discapacidad ya que no es la autoridad competente para hacerlo. Si bien indica que iniciaría un amparo, no es correcto el objeto propuesto: la entrega de un certificado de discapacidad. El error persiste en la medida cautelar solicitada. No hay un análisis jurídico que dé sustento a la obligación de dar cobertura a la medicación. La invocación del derecho a la salud se fundamenta en la Constitución Nacional y en normas convencionales. Menciona la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores pero no señala que artículos serían aplicables en el caso. No rebate específicamente los argumentos de Pami. Solicita un BLSG. No ofrece prueba en el amparo, no plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo ni hace reserva del caso federal. Hace una cita de un fallo pero no lo explica ni vincula con el caso.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.

Se le asigna un total de 27 (veintisiete) puntos.

POSTULANTE 18

Caso Penal: Funda adecuadamente la exención de prisión solicitada. Apela el auto de procesamiento con argumentos sólidos tendientes a demostrar la falta de finalidad de explotación laboral, con citas de jurisprudencia pertinente y critica el dictado de la prisión preventiva.

Se le asignan 25 (veinticinco) puntos.

Caso Defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. La propuesta procesal no contempla peticiones relativas a medidas de protección de la víctima, así como tampoco de aseguramiento probatorio. Se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se señalan derivaciones a otros organismos, ni referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Caso no penal: Menciona el carácter de su intervención y advierte la vulnerabilidad de la consultante y analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Reglas de Brasilia). Sin embargo no se refiere a la Resolución DGN 230/17. Funda el derecho a la salud y a la vida digna en la CN, en las normas de los tratados internacionales y especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Solicita que se adopte perspectiva de género. Asimismo, menciona ley de enfermedades poco frecuentes, las leyes que regulan las obras sociales y al Pami pero no las desarrolla. No rebate específicamente los argumentos del Pami especialmente el rol del médico tratante y el PMO. Como estrategia indica correctamente que iniciaría una acción de amparo y analiza los requisitos de procedencia en relación a las circunstancias del caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

cautelar analizando los recaudos para su viabilidad. Ofrece prueba (le faltaría adjuntar el recibo de la jubilación y la constancia del precio del medicamento para demostrar la imposibilidad de pagarlo.). BLSG, inconstitucionalidad art. 15, Cuestión federal. Cita jurisprudencia vinculada adecuadamente con el caso.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Se le asigna un total de 60 (sesenta) puntos.

POSTULANTE 19

Caso Penal: Plantea nulidad del procedimiento por originarse en una denuncia anónima y solicita el sobreseimiento por inexistencia de cauce independiente. Se agravia por falta de fundamentación del procesamiento e indica la falta de prueba que acredite la finalidad de explotación laboral muy escuetamente. Critica el dictado de la prisión preventiva. No solicita medidas alternativas ni exención de prisión.

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. No se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se señalan derivaciones a otros organismos, ni referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: Hace referencia el carácter de su intervención y menciona la Resolución 230 aunque lo hace genéricamente (No menciona la ley 27149 y las Reglas de Brasilia). Realiza gestiones extrajudiciales ante Pami. El oficio al Ministerio de Salud parece innecesario ya que toda la información que requiere se encuentra en la página web (tanto lo que se refiere al listado de enfermedades poco frecuentes como a los medicamentos que integran el PMO). Fundamenta el derecho a la salud muy genéricamente ya que si bien menciona la CN y tratados internacionales no identifica cuáles serían los artículos aplicables. Omite mencionar la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tampoco analiza la ley de obras sociales, la ley del INSSJP y la ley de enfermedades poco frecuentes. No rebate los argumentos de Pami especialmente la falta de inclusión en el PMO y el ofrecimiento de medicación alternativa. Hace referencia a la situación socioeconómica de la consultante. Si bien indica que iniciaría una acción de amparo no analiza los requisitos de esta acción y su procedencia en el caso. Sostiene que solicitaría el dictado de una medida cautelar pero sus requisitos de viabilidad son analizados parcialmente. Ofrece prueba adecuada a los hechos del caso. Menciona la necesidad de

iniciar BLSG, plantear la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo y hace reserva del caso federal. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 45 (cuarenta y cinco) puntos.

POSTULANTE 21

Caso Penal: Cuestiona la validez del procedimiento inicial por no habérselo convocado en su carácter de defensor sin indicar qué manda legal impone ese deber ni tampoco cuál sanciona con nulidad dicha inobservancia. Idéntico planteo con respecto a la actuación de la autoridad administrativa. Señala que la conducta de su asistido constituiría una infracción a la legislación laboral, sin profundizar. Solicita la excarcelación del imputado sin advertir que no se encuentra detenido y sin indicación de las normas que la habilitarían. Funda la atipicidad de la conducta de su asistido en la ausencia de los medios comisivos previstos en el art. 2 de la ley 26364 sin advertir que la reforma operada por la ley 26.842 los suprimió del tipo básico al establecerlos como calificantes.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. No se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Caso no penal: Desconoce los deberes y atribuciones de los Defensores Públicos Oficiales en materia no penal, específicamente el art. 42 inc. a de la ley 27149, la Resolución 230 de la DGN y las Reglas de Brasilia. La referencia “a modo ejemplificativo” al amparo es sumamente genérica ya que no analiza adecuadamente los requisitos de viabilidad de esta acción de acuerdo con las circunstancias del caso. No menciona siquiera la necesidad de interponer una medida cautelar, ni la realización de otros planteos. Enuncia el derecho a la salud pero no lo fundamenta, ni intenta rebatir mínimamente los argumentos del Pami.

Se le asignan 3 (tres) puntos.

Se le asigna un total de 25 (veinticinco) puntos.

POSTULANTE 23

Caso Penal: Funda adecuadamente el pedido de exención de prisión, con cita de normas aplicables y jurisprudencia. Plantea nulidad del procedimiento por originarse en una denuncia anónima y en un



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

allanamiento realizado sin orden judicial. Solicita el sobreseimiento por aplicación de la regla de exclusión y doctrina del fruto del árbol envenenado. También deduce nulidades por falta de requerimiento fiscal y ausencia de testigos de actuación cuyos presupuestos no surgen de la consigna. Analiza muy escuetamente los requisitos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de trata.

Se le asignan 22 (veintidós) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. Es correcto el desarrollo de diligencias propias de la representación procesal de la víctima, así como las medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. Se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos, y referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 20 (veinte) puntos.

Caso no penal: Justifica su actuación invocando una norma que no resulta aplicable en el caso ya que el art. 45 de la ley 27149 se refiere a la Función de los Defensores Públicos Tutores. Más allá de ello, no explica cuáles son los criterios que justifican su actuación. No menciona la Resol DGN 230/17, ni las Reglas de Brasilia. Realiza una intimación extrajudicial. Indica que debería iniciarse una acción de amparo y analiza adecuadamente los requisitos de procedencia de esta vía. Fundamenta en el derecho a la salud invocando las normas pertinentes de los tratados internacionales. Omite invocar especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Justifica en el caso la aplicación de la ley 24901 a pesar de la falta de CUD y fundamenta. Menciona las leyes de obras sociales. No analiza la ley de EPF. Rebate el argumento de Pami señalando el valor de la prescripción efectuada por el médico tratante. No se refiere expresamente al PMO. Plantea una medida cautelar innovativa y analiza correctamente sus requisitos. Omite el ofrecimiento de prueba. Plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo. Justifica la competencia. Pide habilitación de días y horas inhábiles. Plantea caso federal. Señala que iniciaría BLSG. Cita jurisprudencia atinente al caso.

Se le asignan 17 (diecisiete) puntos.

Se le asigna un total de 59 (cincuenta y nueve) puntos.

POSTULANTE 24

Caso Penal: Postula muy escuetamente, sin cita de normas legales ni jurisprudencia aplicable, que no se haga efectiva la prisión preventiva dispuesta. Analiza superficialmente la prueba de informes de los organismos administrativos y postula la atipicidad sin fundar su pedido.

Se le asignan 5 (cinco) puntos.

Caso defensoría de víctima: Se limita a proponer la articulación de un remedio recursivo, pero no ofrece ninguna especificación acerca de sus extremos, y una referencia genérica de algunos de los derechos de la víctima, careciendo de una estrategia procesal que pueda ser evaluada. Por otra parte: no señala las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas, ni desarrolla peticiones consistentes con la representación procesal de la víctima, así como tampoco de medidas de protección de la víctima, y de aseguramiento probatorio. Por cierto, no se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso, ni se señalan derivaciones a otros organismos, ni referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 2 (dos) puntos.

Caso no penal: No menciona el carácter de su intervención ni analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resolución 230, Reglas de Brasilia). No realiza un mínimo tratamiento de las consignas planteadas en el caso de examen.

Se le asignan 2 (dos) puntos.

Se le asigna un total de 9 (nueve) puntos.

POSTULANTE 26

Caso Penal: Deduce apelación fundada en la arbitraria apreciación de la prueba y analiza cuestiones de hecho que así lo demostrarían, pero omite realizar el análisis dogmático del delito de trata. Cuestiona el dictado de la prisión preventiva sin brindar argumentos relativos al caso concreto. No solicita exención de prisión.

Se le asignan 10 (diez) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de patrocinio, donde resultan resumidos tanto el catálogo de derechos de la víctima, así como una correcta estrategia de despliegue procesal. No señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. La propuesta procesal no contempla peticiones relativas a medidas de protección de la víctima, así como tampoco de aseguramiento probatorio. Se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. No se señalan derivaciones a otros organismos para la asistencia de la víctima. Se señalan correctamente referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: No menciona el carácter de su intervención ni analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resolución 230, Reglas de Brasilia). Sostiene que pedirá un informe a la obra social sobre la situación de la afiliada. No expresa si establecerá algún tipo de plazo para obtener la respuesta ya que la situación de salud es grave. Indica que iniciaría una acción de amparo y analiza los requisitos de esta acción y su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar y analiza los requisitos de viabilidad. El tratamiento del caso es sumamente



Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

genérico. Se limita a volver a contar los hechos del caso, invoca el derecho a la salud y a la vida y lo funda en normas constitucionales. No cita las normas respectivas que protegen este derecho en la normativa internacional de los derechos humanos especialmente en el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No menciona la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo. Los argumentos de Pami no son respondidos. No analiza la incidencia del PMO ni la relevancia de lo indicado por la médica tratante. Ofrece prueba (le faltaría acreditar el alto costo de la medicación y la condición de enfermedad poco frecuente). Indica que iniciaría BLSG. No menciona el ni la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo ni plantea caso federal. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 13 (trece) puntos.

Se le asigna un total de 41 (cuarenta y un) puntos.

POSTULANTE 28

Caso Penal: Plantea nulidad del procedimiento inicial sin efectuar distinguos entre la actividad inicial y el exceso en que se habría incurrido posteriormente al ingresar al domicilio de su asistido. Analiza correctamente las cuestiones de hecho y prueba pero no repara en que los medios comisivos que menciona, en la actualidad constituyen agravantes y la ausencia de ellos -que señala correctamente- ya no conduce a la atipicidad que postula. Critica el dictado de la prisión preventiva pero no deduce exención de prisión. Excede el espacio asignado para la resolución del caso.

Se le asignan 15 (quince) puntos.

Caso defensoría de víctima: Realiza una adecuada propuesta de asistencia técnica, e identifica correctamente el catálogo de derechos de la víctima que resultan de aplicación. Señala con precisión las limitaciones del patrocinio del Ministerio Público de la Defensa a los casos de víctimas. La propuesta procesal contempla en forma genérica peticiones relativas a medidas de protección de la víctima, y no se relevan peticiones de medidas de aseguramiento probatorio, ni se consignan referencias jurisprudenciales en apoyo de las conclusiones del caso. Se señalan correctamente derivaciones a otros organismos para la asistencia de la víctima, y se formulan correctamente referencias al aseguramiento de la reparación económica.

Se le asignan 18 (dieciocho) puntos.

Caso no penal: No menciona el carácter de su intervención ni analiza las normas que regulan la actuación de la DPO (Ley de MPD, Resol 230, Reglas de Brasilia). Sostiene que realizaría gestiones extrajudiciales ante la obra social. No expresa si establecerá algún tipo de plazo para obtener la respuesta ya que la situación de salud es grave. Indica que iniciaría una acción de amparo y analiza adecuadamente los requisitos de esta acción y su procedencia en el caso. Sostiene que pediría el dictado de una medida cautelar y analiza correctamente los requisitos de viabilidad. Invoca el derecho a la salud y a la vida y lo funda en normas constitucionales. No cita las normas respectivas que protegen este derecho en la normativa internacional de los derechos humanos especialmente en

el caso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. No menciona la ley de obras sociales, la ley del INSSJP, la ley de enfermedades poco frecuentes y de alto costo. Los argumentos de Pami no son respondidos. No analiza la incidencia del PMO ni la relevancia de lo indicado por la médica tratante. No ofrece prueba. Indica que iniciaría BLSG, pediría la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley de amparo y plantea caso federal. Cita jurisprudencia.

Se le asignan 12 (doce) puntos.

Se le asigna un total de 45 (cuarenta y cinco) puntos.

El presente dictamen fue remitido por correo electrónico a los Dres. García Ongaro, Malato y Rotaeché a las casillas de correo electrónico oportunamente denunciadas, quienes prestaron por ese medio su conformidad con el documento remitido, por lo que se tiene por firmado válidamente, en la ciudad de Buenos Aires. Doy fe.-----

Fdo: Carlos BADO (Sec. Letrado) – 04/03/2024